

Cesión de datos por los Montes de Piedad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Informe 226/2003

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la transmisión a los Órganos de la Dirección General de la Policía de los datos referentes a quienes hubieran obtenido de los Montes de Piedad préstamos con garantía sobre objetos preciosos de oro, plata o platino.

La transmisión planteada constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como "Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado".

Tratándose, como se ha indicado de una cesión de datos, el artículo 11.1 establece como principio general que "Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado".

No obstante, este principio general podrá exceptuarse en los supuestos contemplados en el apartado 2 del propio artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, entre los que se encuentra, en primer lugar aquél en que la cesión esté autorizada por una norma con rango de Ley.

Dicho esto, la cuestión planteada en la consulta radica en señalar si en este caso existe una norma con rango de Ley que otorgue cobertura a la comunicación de los datos, dado que la consulta parece indicar que la cesión se encuentra exclusivamente fundada en normas de rango reglamentario.

Efectivamente, el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, modificado posteriormente por el Real Decreto 968/1988 impone determinadas obligaciones, aplicables, según su artículo 87 a "Las casas de compraventa, las casas de empeño o préstamo y, en general, quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o platino, con o sin piedras preciosas o perlas finas", haciendo el artículo 88 extensivas dichas obligaciones a las actividades que "constituyan transferencia de objetos usados, en cuya composición entren metales preciosos, cualquiera que sea la forma de la operación, personas que intervengan y procedencia o destino de tales objetos, comprendiéndose, expresamente, las de compraventa y préstamos y, concretamente, las operaciones comerciales que realicen los Montes de Piedad, de concesión de préstamos con garantía sobre objetos de oro, plata o platino".

Dentro de dichas obligaciones, el artículo 91 establece que "Los titulares de las actividades a que se refieren los artículos de este capítulo deberán llevar un libro-registro, foliado y sellado en todas sus hojas por la Jefatura Superior o Comisaría de Policía correspondiente, en el que, por orden correlativo y sin interrupción de continuidad, asentarán todas las operaciones que realicen,

consignando: Fecha de la operación; Nombre, apellidos, domicilio y número del documento nacional de identidad del interesado o interesados; Clase y peso de metal del objeto de que se trate, y si contiene piedras preciosas, el peso en quilates; Reseña de los contrastes oficiales, si los hubiere; Precio abonado; Reseña, en su caso, de la papeleta de empeño; y Fecha de enajenación del objeto u objetos".

Añade el último párrafo, en la redacción dada por el Real Decreto 968/1988, que "Alternativamente, para cumplir la obligación anterior, podrán emplearse registros informáticos que incluyan los datos anteriores, debidamente controlados, y de los que se conserve la pertinente constancia escrita".

Estas disposiciones que serían, en principio, vinculantes para las Cajas de Ahorros no se encuentran recogidas en una norma con rango de Ley, por lo que pudiera entenderse que las obligaciones previstas en el Real decreto 197/1988 se encuentran en la actualidad derogadas, por ser contrarias a la exigencia de Ley habilitante para la cesión, impuesta por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, norma posterior y superior en rango normativo al mencionado Real Decreto.

No obstante, el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone que "Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente".

A nuestro juicio, la mencionada norma viene a otorgar rango suficiente a las obligaciones reglamentariamente exigidas con carácter previo a su entrada en vigor, facultando la comunicación a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todos aquellos datos que pudieran afectar a la seguridad ciudadana, siendo así que el propio precepto recoge a título ejemplificativo (al utilizar la palabra "como"), aquellas que pudieran resultar más relevantes.

A nuestro juicio, podría considerarse que la norma que acaba de ser citada resulta aplicable al supuesto planteado en la consulta, dada garantía constituida sobre los objetos empeñados, que puede suponer en la práctica una transmisión del dominio a favor de la consultante en caso de ser precisa la ejecución de la mencionada garantía y el hecho de que el propio Reglamento 197/1988 sitúa a las actividades desarrolladas por los Montes de Piedad entre aquéllas para las que se exigen especiales garantías de llevanza de libros y comunicación de los datos a la autoridad competente en materia de seguridad ciudadana.

En consecuencia, a la vista de lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 1/1992, cabe considerar que la comunicación de los datos por parte de los Montes de Piedad a los Órganos del Cuerpo Nacional de Policía encuentra su amparo legal en el mencionado precepto, por lo que la misma

sería conforme a lo establecido en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.